

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **FREDY ALBERTO CASTRILLÓN AGUDELO**
Demandados : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA**
Radicado : **05001 31 05 006 2018 00463 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común -
Decisión : Confirma Sentencia absolutoria de Primera Instancia
Sentencia No : 60

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, como ponente**, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se solicita se **declare la nulidad de los dictámenes** de pérdida de capacidad laboral emitidos por COLPENSIONES y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia; que **el demandante presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50% de origen común y fecha de estructura el 31 de diciembre de 1984**; se condene a COLPENSIONES a reconocer y **pagar la pensión de invalidez** de origen común, retroactivo pensional, mesadas adicionales, intereses moratorios, indexación, costas procesales, condenas ultra y extra petita.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que el demandante se encuentra afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida; fue calificado por COLPENSIONES el día 8 de diciembre de 2016, asignándole el **60.03%** de pérdida de capacidad laboral (PCL) de origen común, **estructurada el 29 de octubre de 2016**; la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia emitió dictamen el 2 de junio de 2017, modificando la fecha de **estructuración para el 12 de septiembre de 2016** de origen común. El demandante acudió ante la **IPS Universitaria** de la Universidad de Antioquia, donde se emitió dictamen el 18 de julio de 2017, estableciendo como **fecha de estructuración el día 31 de diciembre de 1984**, fecha para la cual había cotizado más de 300 semanas, cumpliendo los requisitos para acceder a la pensión de invalidez de origen común; prestación que fue reclamada sin haber recibido respuesta.

Respuesta a la demanda:

COLPENSIONES a través de apoderada judicial, aceptó lo referente a la afiliación del demandante y densidad de semanas cotizadas, los dictámenes practicados por las entidades demandadas y la reclamación, aclarando que el día 3 de julio de 2018, le comunicó que debía radicar el trámite con los documentos completos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones denominadas inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, prescripción, innominada, imposibilidad de condena en costas.

Por su parte, el apoderado de la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA**, expuso que emitió dictamen de pérdida de capacidad laboral conforme al procedimiento legal y a los sustentos de hecho y de derecho establecidos en la normatividad aplicable, con apego a las pruebas obrantes en la carpeta al momento de la calificación. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso en su defensa las excepciones denominadas inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones.

Sentencia de Primera Instancia:

El **Juzgado Sexto Laboral** del Circuito de Medellín mediante Sentencia del 23 de mayo de 2022, **absolvió a COLPENSIONES y a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia**, de las pretensiones formuladas en su contra por el señor Fredy Alberto Castrillón Agudelo; impuso costas a cargo del demandante, agencias en derecho en la suma de \$1.200.000 en favor de cada una de las demandadas.

Recurso de Apelación apoderado del demandante:

Solicita se revoque la Sentencia de Primera Instancia y en su lugar se acceda a las pretensiones, dándose valor al dictamen aportado con la demanda, existiendo allí historia clínica, con la cual se demuestra que el señor Fredy Alberto tenía una discapacidad neurológica y mental desde 1979 y 1984; aduce falta de coherencia en los dictámenes de COLPENSIONES, que estructuró la invalidez dos meses antes de la evaluación y la Junta Regional el mismo día, pues si bien no se cuenta con día, mes y año, si puede decirse que por lo menos desde el año 1984 el paciente presentaba criterios de invalidez, **pudiéndose definir la fecha de invalidez el día 31 de diciembre de 1984, ratificándose la pérdida de capacidad laboral que no se discute en este proceso.** También se ordenó oficiar a los profesionales en salud para que aportaran la documentación que sirvió de base para dicho dictamen, donde ratifican lo indicado por el Médico José William Vargas Arenas, esto es, que en 1979, a la edad de 24 años, le fue diagnosticado *Guillén Barré* con la pérdida de fuerza, en fisioterapia durante un año, no pudo volver a trabajar, con cuadro depresivo. De acuerdo con lo anterior, le es aplicable el Decreto 232 de 1984 para acceder a la pensión de invalidez, al contar con 300 semanas de cotización; anotando que no se trata de una prueba documental, sino pericial.

Los apoderados de las partes no allegaron alegatos de conclusión.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación**, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Conflicto Jurídico:

El asunto a dirimir, radica en verificar si es procedente revocar la Sentencia de Primera Instancia, analizándose si es procedente integrar o conformar un solo dictamen, tomando la fecha de estructuración de la invalidez del demandante, la señalada por el Médico José William Vargas Arenas -31 de diciembre de 1984- y la pérdida de capacidad laboral del 60.03% asignada por COLPENSIONES, para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común, intereses moratorios o indexación, retroactivo pensional.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar la decisión de Primera Instancia; por las siguientes razones:

De acuerdo a la prueba practicada en Primera Instancia, **se encuentra acreditado en el proceso** que el señor Fredy Alberto Castrillón Agudelo, fue valorado por **COLPENSIONES** entidad que emitió dictamen el día 8 de diciembre de 2016, asignándole el **60.03%** de pérdida de capacidad laboral (PCL) de origen común, con **fecha de estructuración el día 29 de octubre de 2016;** para lo cual valoró las deficiencias *síndrome de Guillain-*

Barre, trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión, hipertensión esencial (primaria) (fls 31 a 37 archivo 01). Al haberse manifestado inconformidad frente a la fecha de estructuración, la **Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia** mediante dictamen del 2 de junio de 2017, **conceptuó que la fecha de estructuración es el día 12 de septiembre de 2016**, día de la valoración por psiquiatría que define la secuela mental.

La Juez de Primera Instancia explicó en términos generales, que no encontró probado ningún fundamento jurídico para restarle validez a los dictámenes emitidos por las entidades demandadas, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico en estos casos, sin que hubiera razones para dejarlos sin efectos, a partir de las apreciaciones meramente subjetivas de un médico particular, carente de fundamento jurídico y fáctico.

Sobre el tema puesto a consideración de esta Sala de Decisión Laboral, tenemos que **el artículo 41 de la Ley 100 de 1993** modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, **establece que corresponde** al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -**COLPENSIONES**-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP hoy ARL-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, **determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral, calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias; pudiéndose controvertir ante las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional y nacional; indicando expresamente que contra dichas decisiones, proceden las acciones legales.**

Respecto a la **contradicción del dictamen de pérdida de capacidad laboral, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL1044 de 2019 Radicación 68074**, reiterando CSJ SL5280-2018 y CSJ SL16374-2015, **indicó que el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez no es prueba solemne**, de modo que **puede ser controvertido ante los Jueces del Trabajo**, sin que sea un requisito de procedibilidad para el reconocimiento de la pensión de invalidez realizar el trámite ante dichas Juntas, ya que la parte interesada puede acudir directamente ante la jurisdicción ordinaria laboral, donde puede solicitar una nueva valoración, para que sea el Juez quien decida conforme a la sana crítica lo pertinente, a efectos de resolver sobre la pretensión demandada; veamos:

“...la jurisprudencia de la Corporación ha establecido que los dictámenes proferidos por las juntas de calificación de invalidez, sean regionales o nacionales, no son pruebas solemnes, de modo que pueden ser controvertidas ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por aquellas.

(...)

Así las cosas, el ejercicio de los recursos previstos en el decreto en cita contra los dictámenes que profieren las juntas de calificación de invalidez, no es el único medio con que cuenta la parte contra la cual se pretenda hacer valer, para oponerse y disentir de su contenido, puesto que también puede controvertirlo ante la jurisdicción ordinaria laboral; incluso, dentro del proceso, puede hacer uso de la solicitud de una nueva valoración, para que sea el juez quien decida conforme a la sana crítica lo pertinente, a efectos de resolver sobre la pretensión deprecada...”.

A su vez, en **Sentencia SL877 de 2020**, señaló que **los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez, son prueba, no solemne**, con los cuales se puede acreditar el grado de la pérdida de capacidad laboral, su origen y fecha de estructuración, pero que al no exigir la ley determinado elemento de persuasión para acreditar la pérdida de capacidad laboral, **debe respetarse la libertad probatoria de la que están asistidos los juzgadores de instancia**; explicando que **si el Juez**, para definir una determinada controversia, **se ve enfrentado a**

dos dictámenes disímiles, podrá escoger para fundamentar su decisión, aquél que le merezca mayor credibilidad, dentro del marco de libertad probatoria que le asiste, de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Sobre lo que es objeto de apelación, solicita el apoderado del demandante se revoque la Sentencia de Primera Instancia y en su lugar, se acceda a las pretensiones formuladas, dándose valor un dictamen emanado de un médico particular, quien estimó que la fecha de estructuración de la invalidez del señor Fredy Alberto corresponde al 31 de diciembre de 1984, para que, aunado al 60.03% de pérdida de capacidad laboral asignado en el dictamen emitido por COLPENSIONES, se condene al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

Al respecto, debe decirse que el planteamiento expuesto por el apoderado recurrente, no puede tener acogida como sustento legal para el reconocimiento de la prestación económica de invalidez, siendo inviable tratar de conformar o integrar un nuevo dictamen, tomando elementos de uno y de otro, a su elección.

Sobre este tema, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en **Sentencia SL1021 de 2019**, reiterando SL del 18 de septiembre de 2012 Radicado 35450 y SL del 19 de octubre de 2006 Radicado 29622, señaló que **el operador judicial está sujeto a tomar en su integridad el dictamen que de manera objetiva le dé mayor credibilidad y certeza** sobre los puntos debatidos, pero **no puede armar uno alterno, tomando datos de un lado y de otro**, por cuanto ello implicaría vulneración al debido proceso y derecho de defensa de

las partes; pues si bien el Juez Laboral tiene plena facultad para examinar los hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, cuando se está frente a múltiples dictámenes de pérdida de capacidad laboral, **el dictamen acogido debe serlo en su integridad**, sin que pueda escindirlo y menos, configurar uno nuevo, con apartes de uno y otro; veamos los apartes pertinentes:

“...Ahora bien, cuando se controvierte un dictámen, el operador judicial está sujeto a tomar en su integridad el que de manera objetiva le de mayor credibilidad y certeza sobre los puntos debatidos, pero lo que no puede hacer, es armar o configurar uno propio a su acomodo, tomando datos de un lado y de otro, que fue precisamente lo que aconteció en el caso de autos en el cual el fallador de segundo grado edificó a su manera de ver un dictámen donde estableció su propio porcentaje de pérdida de capacidad laboral y una fecha de estructuración.

(...)

*Es por lo anterior, que la Corte ha sido clara en que, si en un proceso se encuentran enfrentados dos dictámenes, uno de la Junta Regional y otro de la Nacional, **el juez del Trabajo y de la Seguridad Social, en virtud de la libertad probatoria prevista por el artículo 61 del CPTSS, está facultado para escoger lo establecido en el primero o en el segundo, e inclusive ordenar un tercero, pero el que acoja debe tomarlo en su integridad, esto es, no puede escindirlo y menos configurar uno nuevo con apartes de uno y otros...*** (Negritas fuera de texto).

Lo pedido por el apoderado del demandante en el recurso de apelación, es además incoherente con las pretensiones de la demanda, donde se solicitó *se declare la nulidad del dictamen de COLPENSIONES 201619313179FF del 8/12/2016*, sin embargo, ahora aduce que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral asignado no se discute en este proceso; lo cual implica precisamente darle plena validez al dictamen de COLPENSIONES, entidad que lo calificó con el 60.03% de PCL. No siendo procedente que la parte interesada pretenda beneficiarse, tomando solo los elementos convenientes del dictamen emitido por la entidad de seguridad social facultada para ello y desechando los que en su criterio, no se ajustan a sus propósitos, para integrar un dictamen alterno con elementos de otro informe pericial.

Lo anterior sería suficiente para desestimar lo solicitado por el recurrente. No obstante, esta Sala de Decisión Laboral encuentra pertinente, resaltar otros aspectos trascendentales que hacen inviable acceder a lo pretendido y que fueron tenidos en cuenta por la Juez de Primera Instancia para absolver a las demandadas; por ejemplo, el dictamen de la **Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia** de fecha 2 de junio de 2017, **fijando la fecha de estructuración de la invalidez el día 12 de septiembre de 2016**, cuando la valoración por psiquiatría definió la secuela mental, para lo cual explicó que el paciente desde tiempo anterior ya presentaba las secuelas motoras por el síndrome de Guillain-Barré, aclarando que estas meras secuelas no alcanzan a darle el porcentaje para la invalidez; veamos: “...previamente **ya tenía** la hipertensión arterial y **las secuelas motoras por el Guillen Barre que el dio en 1979**, y que **estas secuelas motoras por sí solas, no le dan la invalidez al paciente** a la luz del Decreto 1507 de 2014...” (Negritas fuera de texto).

Por tanto, existe en el proceso un concepto técnico y científico emitido por un grupo calificador, conformado por profesionales en Medicina y Psicología, asignados a la Junta Regional, entidad de creación legal y con competencia para emitir dictámenes, que con fundamento en el Manual Único de Calificación de Invalidez, concluyeron que si bien para el año 1979 el demandante se vio afectado por la mencionada patología, esas solas secuelas no permiten otorgarle el grado de invalidez y para alcanzar el 50% de PCL le fueron valorados también el *trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión* y la *hipertensión esencial (primaria)*.

Siendo relevante la constancia registrada en el dictamen de **COLPENSIONES**, según la cual, **se carece de soportes e historia clínica para fijar una fecha de estructuración en**

fecha anterior: “...con lo aportado e incluso acudiendo al concepto de historia natural de la enfermedad, **no es posible fijar la fecha de estructuración en 1979 ni en 1984, ni antes del año 2016.** No se documenta manejo rehabilitador ni es posible objetivar fecha exacta de secuelas ante una **historia clínica incompleta** en la cual **no se aporta ni siquiera la historia clínica de los últimos años de manejo médico, así sea por médico general o médicos particulares que aduce haber consultado...**” (fl 37 archivo 01).

Sumado a lo anterior, para el dictamen de COLPENSIONES se realizó examen físico y directo al paciente, lo que no ocurrió con el emitido por el médico particular aportado con la demanda, aduciendo que solo se debatía la fecha de estructuración y se infiere que además no estaba en capacidad de realizar a partir de la nota: *se trata de paciente residente en Estados Unidos* (fl 25 archivo 01), tampoco hubo apoyo en ayudas diagnósticas; por tanto, se aprecia que dicho dictamen no cumple con las características de una valoración al estado de salud en forma completa e integral; tal como explicó la Juez de Primera Instancia.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **confirmar** la Sentencia de Primera Instancia, incluyendo lo relativo a la condena en Costas.

COSTAS:

Se condenará en costas en Segunda Instancia a cargo del demandante, al no haber prosperado el recurso de apelación formulado, fijándose como agencias en derecho la suma de \$600.000, a razón de \$300.000 en favor de cada una de las entidades demandadas; de conformidad con lo establecido en los

artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de apelación se revisa, incluyendo lo relativo a la condena en Costas; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: Se condena en **Costas** en esta Segunda Instancia a cargo del demandante Fredy Alberto Castrillón Agudelo, fijándose como agencias en derecho la suma de \$600.000, a razón de \$300.000 en favor de cada una de las entidades demandadas COLPENSIONES y Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia; según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por EDICTO, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL
HACE SABER:**

**Que se ha proferido sentencia en el proceso
que a continuación se relaciona:**

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **FREDY ALBERTO CASTRILLÓN AGUDELO**
Demandados : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES, JUNTA REGIONAL DE
CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA**
Radicado : **05001 31 05 006 2018 00463 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común -
Decisión : Confirma Sentencia absolutoria de Primera Instancia
Sentencia No : 60

FECHA SENTENCIA:

27 de marzo de 2023

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Fijado hoy miércoles 29 de marzo de 2023 a las 8:00 Am Desfijado hoy
miércoles 29 de marzo de 2023 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario